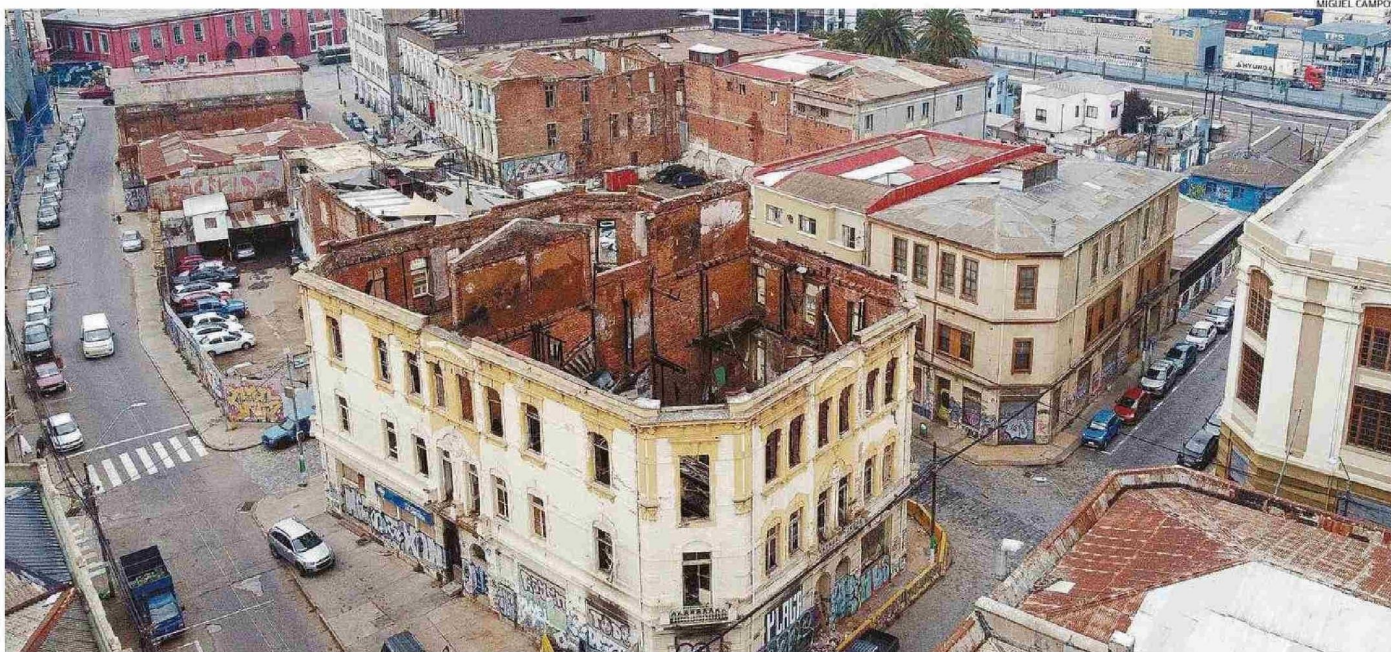


LA TRIBUNA DEL LECTOR



No necesitamos más diagnósticos

POR ALFONSO SALINAS M., PRESIDENTE DE ASIVA

¿Quién podría no compartir la frustración que se respira en Valparaíso? ¿Quién, con algo de apego a esta ciudad, no ha sentido rabia, tristeza o vergüenza al ver su deterioro? Tres intervenciones recientes —la columna de Eduardo Dib, la denuncia sobre la inoperancia de la Corporación del Sitio Patrimonio Mundial publicada en un editorial de *El Mercurio de Valparaíso*, y ahora la presentación ante la Unesco realizada por el abogado Juan Carlos Manríquez, connotado penalista conocido por representar a figuras públicas en casos de alta visibilidad— expresan con crudeza esa sensación de abandono. Valparaíso parece ir de mal en peor, y eso es visible no sólo en el deterioro físico de su entorno —edificios patrimoniales quemados, fachadas sucias y rayadas, veredas rotas, espacios públicos descuidados—, sino también en sus calles vacías, en el éxodo de sus vecinos y en la impotencia de quienes aún luchan por revertir el destino.

Pero después del lamento

viene la pregunta esencial. ¿Qué hacemos? Más allá de interpelar al Estado, al municipio o a cualquier institución pública, ¿qué se espera exactamente que se haga? ¿Qué es realista pedir? ¿Qué es posible ejecutar, más allá de la retórica?

Porque si algo no necesitamos es repetir diagnósticos. Lo que urge es pasar de la indignación a la acción, reconociendo primero que este no es un problema simple, ni nuevo, ni exclusivo de Valparaíso.

Los deterioros urbanos ocurren en muchas partes del mundo. Los centros históricos tienden a despojarse, los servicios se trasladan, el comercio se retrae. Pasa en Santiago, está comenzando a pasar en Viña del Mar, y hasta Reñaca muestra signos de desplazamiento hacia Concón. Se trata de procesos complejos, donde se cruzan múltiples variables como pobreza, abandono, marginalidad, falta de demanda, inseguridad, fragilidad estructural, informalidad y desempleo. Y mientras más tiempo se deja estar, más difícil es revertir la pendiente.

En Chile, además, todo esto se agrava por una condición estructural aún más profunda. Hemos perdido la capacidad de hacer. Resolver problemas parece una hazaña. Las pensiones, la salud, el crecimiento, la seguridad, los impuestos, la vivienda... todo se entrapa en discursos, trámites, permisos, peleas ideológicas. Y Valparaíso no ha sido la excepción. Al contrario, se ha transformado en el emblema de esa parálisis nacional.

Pese a todo, hay una base sobre la cual construir. La Corporación del Sitio Patrimonio Mundial, más allá de sus limitaciones, ha desarrollado catálogos detallados, diagnósticos técnicos, identificación de proyectos e incluso una estimación preliminar de los costos involucrados. No se parte de cero. Reconocer ese trabajo es un primer paso para pasar del lamento a la propuesta.

Tampoco sería justo decir que todo depende del Estado. Algunos privados ya han comenzado a invertir —con timidez, pero con convicción— en la recuperación de espacios pa-

trimoniales. Esos esfuerzos merecen ser reconocidos y valorados. Pero, precisamente porque aún no alcanzan escala ni coordinación suficiente, se requiere un impulso mayor que genere condiciones favorables para que esas iniciativas se multipliquen.

Ese impulso inicial sólo puede venir del Estado. En zonas deterioradas, sin condiciones mínimas de seguridad, infraestructura ni rentabilidad, la inversión privada no llega por sí sola. Por eso, una intervención inicial debe ejecutarse con financiamiento 100 por ciento público, no como un fin en sí mismo, sino como estrategia para atraer inversión privada futura. Esa intervención debe concentrarse territorialmente para no diluirse. Muchas veces, por tratar de abarcar todo al mismo tiempo, se termina haciendo poco y nada. La experiencia muestra que los esfuerzos que se focalizan, se completan y generan impacto. Los que se dispersan, se frustran.

Esa primera etapa —estimada en 30 a 40 millones de dólares— debe centrarse en limpiar,

ordenar, dar seguridad, mejorar el espacio público y recuperar algunas edificaciones emblemáticas. A partir de ahí, puede proyectarse una segunda etapa de inversión mixta, donde por cada peso público se induzcan dos o tres veces más en inversión privada, con esquemas de cofinanciamiento. Luego, una tercera oleada permitiría nuevas inversiones públicas focalizadas, y finalmente, una cuarta etapa podría sostenerse con inversión privada autónoma, sin subsidios, porque el entorno ya ofrecería condiciones adecuadas.

Los impactos pueden proyectarse con cierta precisión. Existen herramientas que permiten estimar el efecto multiplicador de la inversión pública en empleo directo e indirecto, superficie recuperada, inmuebles rehabilitados, aumento del turismo, repoblamiento y recuperación del comercio. Avanzar hacia ese tipo de planificación, con metas cuantificables y una institucionalidad capaz de coordinar actores públicos y privados, es posible.

Hablo con conocimiento de

causa. Me tocó liderar la unidad ejecutora del Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso (PRDUV) en su etapa inicial, luego de haber negociado el crédito con el BID. El diseño era sólido, con foco territorial y mirada integral. Pero su implementación evidenció las tensiones entre la lógica técnica de largo plazo y las urgencias institucionales del corto. Parte del financiamiento terminó desviándose, y el programa perdió fuerza. Los expertos del BID advertían que estos esfuerzos no debían quedar atrapados en la lógica tradicional de inversión pública, sino operar con estructuras más ágiles, como corporaciones público-privadas, capaces de reinvertir la plusvalía y sostener el esfuerzo en el tiempo.

Hoy, con veinte años de distancia, no se trata de sermonear ni de buscar culpables. Se trata de actuar con la madurez que el momento exige. Y de canalizar toda esa frustración hacia un trabajo serio, colectivo, con presupuesto, indicadores y metas claras. Porque sí es posible.